El delito de corrupción en el deporte: el delito de dopaje

~Prof. Marta Escudero Muñoz~

Profesora Asociada, Univ. Carlos III de Madrid. Abogada Fiscal sustituta, Fiscalía TSJ de Madrid.
Socia FICP.

Resumen.- En el presente estudio se lleva cabo un análisis del delito de corrupción en el deporte en su modalidad de dopaje, haciendo una revisión de la actual legislación conforme la LO 1/15 de 30 de marzo y a la luz de la jurisprudencia menor, que ha intervenido en contadas ocasiones. Así mismo se estudia el tipo penal en el derecho comparado y la legislación administrativa actual existente, al ser una norma penal en blanco.

I. ORIGEN Y DERECHO COMPARADO

En el Derecho español a través del art. 44 de la LO 7/2006 de 21 de Noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte se introdujo en el Código Penal el art 361 bis, que tipificó el delito de dopaje.

Este delito castigaba a “los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años”. Agravando la pena a su mitad superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1. que la víctima sea menor de edad. 2. que se haya empleado engaño o intimidación. 3. que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional. Este precepto queda ubicado en el Capítulo III del Título XVII del Libro II bajo la rúbrica de los delitos contra la Salud Pública.

Hasta ese momento, su protección y sanción venía dada por el Derecho administrativo, no entendiéndose necesaria la protección “al deporte” desde el punto de

vista penal en atención al principio de intervención mínima y de que el Derecho Penal debe ser la *última ratio*¹.

La Constitución española de 1978, en su artículo 43. 3 establece que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”, entendiéndose que debe protegerse la salud pública dentro del ámbito y del contexto deportivo y de la competición.

Es en el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte donde se justifica la introducción del nuevo artículo en el CP y se pone de manifiesto los principios de rechazo y de tolerancia cero hacia el dopaje en el deporte tienen, básicamente, un componente de salud individual y de salud pública, pero también una dimensión inequívoca de compromiso con los valores del juego limpio y la libre competición entre iguales, considerados como fundamentos del deporte actual. (...). Se introduce un nuevo artículo 361 bis en el Código Penal, cuya finalidad es castigar al entorno del deportista y preservar la salud pública, gravemente amenazada por la comercialización y dispensación sin control de productos carentes de garantía alguna y dañinos para la salud.

El delito de dopaje deportivo, ha sido modificado recientemente por la Ley Orgánica 1715 de 30 de marzo, suprimiéndose el artículo 361 bis, pasando a ser el artículo 362 quinquies del Código Penal en vigor, con idéntico contenido. Este precepto castiga a “1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años. 2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1.^a Que la víctima sea menor de

¹ MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte general. Barcelona, Reppertor, 2009, p. 40.

edad. 2.^a Que se haya empleado engaño o intimidación.3.^a Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional”.

Mencionar que la reforma introdujo el delito de fraude deportivo en el artículo 286 bis.4 para regular y castigar penalmente las conductas que puedan llevar a cabo los intervinientes en una competición deportiva que, de manera deliberada y de forma fraudulenta, alteren el resultado de la misma, pero que no será objeto de estudio, centrándonos en el delito de dopaje.

En algunos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno la legislación y la punición penal del dopaje llegó con anterioridad. Vamos a ver cómo se desarrolla la legislación penal del delito de dopaje en Francia, Italia y también en Alemania, donde su punición es posterior:

1. Francia

La Ley Francesa de Represión del Dopaje de 28 de junio de 1989 define el dopaje en su artículo 1 como *la utilización durante competiciones o manifestaciones deportivas organizadas por las Federaciones Deportivas de sustancias o procedimientos que modifican artificialmente la capacidad física del atleta* y en el Código del Deporte de 19 de enero de 2007, castiga con mayor pena el delito de dopaje que en España, proscribiéndose la mera posesión sin justificación y hasta con pena de cinco años de prisión los que realicen determinadas conductas destinadas o con finalidad de facilitar el dopaje, su prescripción, fabricación o la destrucción de muestras. Además, se pueden adoptar otras penas complementarias como son la confiscación de las sustancias u objetos utilizados para cometer la infracción, la difusión de la sentencia condenatoria, el cierre de los establecimientos utilizados para cometer la infracción, la prohibición de ejercer determinadas actividades profesionales o la prohibición de ejercer una función pública. También sanciona el dopaje de animales.

2. Italia

En la legislación francesa lo que se protege es la competición a diferencia de la legislación italiana, donde en la Ley 376/2000 se protege la salud pública. La conducta que se sanciona penalmente consiste en procurar, suministrar, utilizar o favorecer la utilización de estas sustancias con el fin de alterar el rendimiento físico del atleta u ocultar u ocultar la utilización de los mismos. La pena es de prisión de tres meses a tres

años y multa de 2.582€ a 51.645€. En el caso de la legislación italiana se castiga también con las mismas penas a quien adopta o se somete a este tipo de tratamientos médicos. En los tipos agravados, según el artículo 64 del Código penal italiano la pena se aumenta en un tercio de la pena señalada. En el caso de la legislación sobre el doping se producen cuando las acciones se realizan: a) produciendo un daño para la salud; b) si se realiza ante menores; c) o si se realiza por un miembro del Comité olímpico nacional italiano o de una federación deportiva nacional, de una sociedad, de una asociación o de un ente reconocido por el Comité olímpico nacional italiano. En todos los casos se producirá la confiscación de las sustancias y el material necesario para realizar la acción tipificada. A diferencia de la legislación francesa y en consonancia con la española, la mera posesión de sustancias dopantes no está tipificada². En el caso en que el autor sea un profesional de la medicina conllevará la inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el aumento de la pena por ser un tipo agravado.

3. Alemania

Alemania era un ejemplo de país que no sancionaba penalmente ningún delito de doping sin perjuicio de la intervención del Derecho Penal en los casos de lesiones corporales, homicidio o estafa.

No fue sin embargo hasta el 2007 cuando el Parlamento alemán, *Bundestag*, aprobó una ley anti dopaje que sanciona penalmente la posesión de sustancias y medicamentos tales como anabólicos, preparados hormonales y antiestrógenos en "grandes cantidades con el objetivo de ser utilizados en el ámbito del deporte". Qué es exactamente grandes cantidades está por definirse. Esta normativa no deja en nada contenta a la oposición que pretendía que se creara el andamiaje legal para penalizar al deportista que haya sucumbido al dopaje. Según verdes y liberales, la ley "no es una respuesta moderna al pantano que supone el dopaje para el ciclismo y otros deportes".

La ley establece penas muy duras, castigando hasta 10 años de prisión para las personas vinculadas con la fabricación y comercialización de anabólicos. Sin embargo, la ley deja bien claro que los deportistas que se dopen no serán penalizados por la

² VALLS PRIETO, La Intervención del Derecho Penal en la actividad deportiva, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 11-14 (2009), p 18.

justicia ordinaria. Eso se deja en manos de las organizaciones deportivas. La legislación penal alemana solo castiga severamente determinadas conductas siendo sancionadas administrativamente las restantes.

II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

El bien jurídico protegido en este tipo penal es la salud pública³, no el mero juego limpio en el deporte, irrelevante desde el punto de vista penal como hemos dicho y que debe ser sancionado en otros ámbitos extramuros del Derecho Penal a diferencia de lo visto en otras legislaciones penales de países de nuestro entorno.

No hay unanimidad tampoco en la doctrina sobre si dicha protección a la salud es individual, manteniendo, algunos autores colectiva⁴, que la salud individual no tiene por qué verse afectada por estos delitos, porque la *ratio legis* es el riesgo general para la colectividad, y por ello su estructura típica encaja mal con esa vertiente individual. Ni tampoco la jurisprudencia presenta una postura unívoca. La STC 62/1983, de 11 de julio, declaró que el bien jurídico protegido en los delitos de riesgo en general contra la salud pública es el bien común en el que la misma consiste, que se refleja en definitiva en la salud personal de los ciudadanos, por lo que estamos en un supuesto en el que la defensa de este interés se hace sosteniendo el interés común, aun cuando en el caso de que se trata el interés personal no sea directo. Por el contrario, la STS 871/2005, defiende la tesis de que la salud pública no existe como un objeto real ni como la suma de la salud de personas individualmente consideradas y añade que la finalidad del legislador, más que la de evitar daños en la salud individual de las personas, es impedir la difusión de una práctica social peligrosa para la comunidad por el deterioro que puede causar en la población.

III. ELEMENTOS DEL TIPO

En relación a los elementos del tipo del artículo 362 quinquies, se distinguían dos planos: el plano objetivo y del subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, los *sujetos activos* pueden ser cualquier persona, no únicamente profesionales médicos y *sujetos*

³ MUÑOZ CONDE, F. Manual de Derecho Penal, Parte Especial. 17ª edición. Ed. Tirant Lo Blanch págs. 603 a 607.

⁴ ROMEO CASABONA, Los delitos contra la salud pública: ¿ofrecen una protección adecuada a los consumidores?, en: Arroyo Zapatero, L. A./Berdugo Gómez de la Torre, I., Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: In memoriam, Volumen 2. Cuenca, Universidad de Salamanca y Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 630.

pasivos lo pueden ser deportistas o aficionados que practiquen algún deporte reconocido como tal por el Consejo Superior de Deportes, no incluyendo por tanto cualquier clase de práctica deportiva. La acción típica es amplia pues incluye conductas que suponían una puesta en peligro para la vida y salud de los deportistas. Si la conducta no supone una puesta en peligro para la vida y salud de los deportistas y/o está justificada terapéuticamente, dicha conducta será atípica. El objeto material del tipo comprende sustancias y métodos dopantes recogidos en la lista que proporciona la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y que es renovada cada año (art 12 LO 7/2006). El delito de dopaje es pues una norma penal en blanco. Desde el plano subjetivo, se exige una acción dolosa que viene dada, por una parte, por la intención de modificar para aumentar las capacidades físicas del deportista y por otra la intención de modificar los resultados de las competiciones deportivas, siendo ambas intenciones alternativas, no acumulativas.

Es un delito de peligro concreto que exige la comprobación del mismo para su consumación y es por tanto posible la tentativa. No se castiga al consumidor de las sustancias o métodos dopantes, pues la auto puesta en peligro de la salud o la vida son impunes.

El apartado 2 del art. 362 quinquies prevé los tipos cualificados que agravan la pena en su mitad superior referidos al suministro de sustancias dopantes a menores, el engaño o intimidación y que el responsable se valga de una superioridad laboral o profesional, pensado este último caso para los equipos profesionales jerarquizados que pueden presionar a sus deportistas para modificar su capacidad de resistencia deportiva. Si el dopaje es del tipo genético podría apreciarse un concurso de delitos entre el art 362 quinquies y el delito de manipulación genética.

Este art. 362 quinquies es de aplicación preferente a otros que castigan el suministro de medicamentos cuando aparecen los elementos subjetivos que exige. Si la conducta de dopaje se prolonga y reitera en el tiempo o afecta una pluralidad indeterminada de sujetos se aprecia delito continuado⁵.

⁵ La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 14 de julio de 2011, no entendió que hubiese delito continuado: El delito continuado del art. 74 del C.P., no es mas que un caso especial de concurso real de delitos homogéneos, varios delitos de igual naturaleza cometidos por un mismo sujeto aprovechando idéntica situación o con semejante modus operandi, siendo el tratamiento penológico del delito continuado, en abstracto, mas favorable al reo en relación con el tratamiento del concurso real del

IV. LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL EN ESPAÑA E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, establece una regulación íntegra del marco jurídico aplicable a la protección a la salud y la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva de España, disipando las dudas del compromiso de nuestro país para evitar actividades contrarias a la práctica del deporte, de acuerdo con la normativa internacional sobre la materia.

La citada Ley crea la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, organismo encargado de la supervisión de los controles, en competición o fuera de la competición, para detectar sustancias prohibidas, así como de establece una serie de medidas para proteger la salud de los deportistas.

La Ley Orgánica 3/2013, supera el nivel de protección del deportista y lucha contra el dopaje, establecido por la Ley Orgánica 7/2006, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte. No hay que olvidar que el 1 de enero de 2015 las legislaciones nacionales tienen que haber implementado el nuevo Código Mundial Antidopaje lo que se traduce en una nueva modificación o reforma de la Ley de 2013, nueva reforma necesaria para lograr la completa adaptación de nuestra Ley a las exigencias del Código Mundial Antidopaje de 2015

Como instrumentos internacionales importantes, no debemos olvidar citar la Convención Internacional Contra el Dopaje aprobada en París el 19 de octubre de 2005, en la que por primera vez los gobiernos de todo el mundo se han puesto de acuerdo para aplicar la fuerza del derecho internacional contra el dopaje. Conforme a lo dispuesto en su Artículo 37, esta Convención entró en vigor el 1 de febrero 2007 con respecto a los Estados que han depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el 31 de diciembre de 2006. España ratificó este

art. 73 del C.P .La Sala considera que la configuración legal del delito del art. 361 bis del C.P . impide tanto el concurso real de varios delitos como el delito continuado, dado que así resulta al formular en plural los sujetos pasivos "deportistas", por lo que, estaremos ante un solo delito del art. 361 bis del C.P ., tanto si se suministran las sustancias a un deportista como si se suministran a varios, al igual que ocurre con el delito del art. 368 del C.P , de tráfico de drogas, por lo que se considera improcedente la calificación de los hechos como delito continuado, debiendo ser calificados como constitutivos de un delito del art. 361 bis del C.P ., y en consecuencia, no procede imponer la pena del delito mas grave en su mitad superior, considerando procedente imponer la pena que a continuación se detallan.

convenio el 25 de octubre de 2006. Además, la Convención contribuye a garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje y también prevé un mecanismo para prestar asistencia a los Estados Parte en la elaboración de programas antidopaje educativos y preventivos por medio del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte gestionado por la UNESCO.

V. EL DELITO DE DOPAJE EN LA JURISPRUDENCIA MENOR

Hay pocas sentencias que hayan resuelto sobre el delito de dopaje. Hay que destacar la sentencia de 10 de junio de 2016, en la que absolvió a dos acusados por delito contra la salud pública al entender que la sangre que utilizaron para las transfusiones a sus pacientes no era un medicamento y así señala que la conducta de los acusados no tiene encaje en el delito por el que fueron imputados y condenados en primera instancia. Los magistrados, tras valorar el ingente esfuerzo argumental efectuado por la magistrada que dictó la sentencia ahora recurrida para considerar la sangre un medicamento, entienden que su decisión choca de frente con la vertiente de seguridad jurídica –que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones-, al ser la acepción gramatical del término extremadamente ambigua, lo que genera un enorme marco de incertidumbre en los destinatarios de la norma que es impropio del derecho penal, y que desaparece si se acude a la regulación administrativa, en la que existe una definición legal accesible a cualquier ciudadano que dese consultarla y por la que se rigen los técnicos en la material.

Es decir, si el método o sustancia proporciona una ventaja frente a los competidores pero no pone en riesgo su salud, no estamos ante la comisión de un delito de dopaje, como fue el Caso Puerto, sino en todo caso, ante una infracción administrativa con una sanción disciplinaria en su caso como puede ser la de no poder competir durante un tiempo, devolución de premios obtenidos durante un período anterior y/o sanciones pecuniarias.

Por otro lado, no basta con la utilización de una sustancia o método prohibido por la legislación deportiva. Objetivamente la sustancia o método utilizado por el deportista debe superar los límites del riesgo permitido por la legislación administrativa o deportiva para practicar cierto deporte. Por todo ello, parece imprescindible una prueba pericial que determine la nocividad de la sustancia o método en relación con la actividad

física desarrollada por el deportista. Si existe una demostración empírica y científica de que el producto o método (o su cantidad o grado de concentración) a pesar de ser dopante, no se ha incluido su prohibición administrativa, la conducta no será delictiva. Ello plantea ciertas dudas cuando el método consiste en las transfusiones de la propia sangre del deportista que ha sido trabajada en circunstancias ambientales de altitud. Es necesario, para ello, que se acredite científicamente que este método ponga el riesgo la salud del deportista para considerar la conducta como delictiva.

En relación con los sujetos pasivos, generalmente, serán deportistas profesionales porque son ellos quienes se ven más beneficiados por el uso de las sustancias dopantes, sin embargo, el tipo penal va un poco más allá incluyendo a cualquier deportista.

Los autores del delito deben efectuar las siguientes acciones: “*prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar sustancias o método prohibidos*”. Se trata de conductas tendentes a transmitir las sustancias o métodos dopantes. La tenencia de la sustancia o método, por sí sola difícilmente constituye un acto delictivo. El autor debe conocer que las acciones antes descritas suponen un riesgo jurídicamente desaprobado. El conocimiento del riesgo se verifica conociendo que los receptores de la sustancia o método son deportistas que están desempeñando prácticas deportivas. No es una cuestión intrascendente, porque en la lista de sustancias prohibidas se encuentran algunas autorizadas por la legislación ordinaria, por ejemplo, el alcohol. El conocimiento del riesgo también se verifica comprobando que el autor sepa que se trata de una sustancia o método prohibido.

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de fecha 20 de julio de 2015, absuelve al considerar que no hubo peligro para terceros, al ser los suministradores los destinatarios de los productos.

En este supuesto, uno de los acusados adquirió estas sustancias para su uso propio y el de su amigo con la finalidad de aumentar su rendimiento deportivo en el gimnasio al que ambos acudían a practicar deporte por recreo. Estas sustancias solo se puede utilizar por prescripción y bajo control médico y solo en las dosis indicadas para tratar trastornos o patologías, que no padecían los acusados⁶.

Dicho lo cual, parece que el Juez a quo habría de partir de las reflexiones expresadas por el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación -y que fueron el presupuesto del sobreseimiento de la causa respecto de Efrain - que pasan por entender que "...que la jurisprudencia existente en materia de aplicación del art.

También absuelve la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de mayo de 2015, si bien por razones distintas. En el supuesto analizado, el acusado, especialista en nutrición y sin antecedentes penales, el día 12 de diciembre de 2007, sobre las 21:00 horas, se encontraba en la calle José de Hierro de Madrid, donde procedía a la venta de medicamentos fuera de los canales autorizados para ello, que no están indicados para aumentar el rendimiento físico de individuos sanos y que pueden poner en peligro la salud de sus consumidores. En concreto, el acusado fue sorprendido cuando se encontraba vendiendo a Rodrigo, aficionado al culturismo, y a cambio de 230 euros, sustancias relacionadas en los hechos probados. La Audiencia absuelve al entender que no se han analizado pericialmente la sustancias intervenidas⁷.

361 bis CP viene considerando en relación con la condición de sujeto activo que lo único cierto y seguro es que el deportista no es nunca el autor del delito ni aún cuando la administración de las sustancias cuente con su expresa voluntad y hasta con su ferviente deseo...".

En cualquier caso, el hecho justiciable habría de pasar por el concierto de uno - Efrain - y otro - Agustín - amigos ocurriendo que habría de encargarse uno - Agustín - de la obtención física de las sustancias -tanto para sí como, en las mismas condiciones, para el otro-.

Pues bien, siendo así las cosas, en las específicas circunstancias concurrentes en las que se produjo la obtención de las sustancias por parte del acusado -que pasaban, entre otras cosas, por la confección de un plan de comidas doble, uno para cada uno de los dos amigos- se habría de llegar a la consideración de que tanto uno - Efrain - como otro - Agustín , el recurrente- habrían de ser deportistas, o sea, destinatarios finales de la sustancia, por lo que no habría de deducirse responsabilidad criminal en su actuación.

Y ello porque los dos habrían de ser los deportistas a los que habría de referirse la jurisprudencia antes mencionada ocurriendo que, de manera circunstancial, quien se encargó de llevar a cabo la actividad específica de la obtención de la sustancia recayó en uno de ellos - Agustín , el recurrente-.

En las condiciones expresadas -recuérdese que se respeta la relación de hechos probados- y en la inteligencia de interpretar de manera adecuada la jurisprudencia a la que se ha venido haciendo mención, la actuación realizada, de manera efectiva, por el recurrente no habría de ser tanto la de proporcionar o facilitar la sustancia cuanto la de hacer la entrega material de la misma -en idénticas condiciones que las recibidas por el propio acusado- para su consumo final.

Así las cosas, tiene ese Tribunal la duda razonable de que la actuación realizada por el recurrente, en las específicas circunstancias en que las mismas se llevó a cabo, integre el tipo por el que se ha declarado la responsabilidad criminal de Agustín, duda que, en el orden jurisdiccional en el que nos encontramos, no puede ser resuelta sino en beneficio de reo".

⁷ Sentencia núm. 323/2015 de 4 mayo. JUR 2015\151007: "El delito en virtud del cual se condena en la Sentencia recurrida es el previsto en el artículo 361 bis del Código Penal , el cual exige como uno de los elementos de la categoría de la tipicidad que el objeto de la acción venga constituido por sustancias o grupos farmacológicos prohibidos que pongan en peligro la vida o la salud .

En el presente caso, si bien consta que los peritos manifiestan que reciben las sustancias y de que en el Informe Técnico de 30 de agosto de 2010 elaborado por dichos peritos se indica productos recibidos de la Comisaría de Ciudad Lineal , n.º Oficio NUM002 , que coincide con el Oficio de remisión de las sustancias intervenidas para sus análisis ; también es lo cierto que no obra que se hubiera practicado un análisis concreto de aquéllas , sino que más bien lo que aparece realizado es un informe explicativo en general acerca de los medicamentos que se relacionan en dicho informe , señalándose el principio activo del que están compuestos y las consecuencias nocivas de los mismos.

Precisamente por la ausencia de análisis concreto de lo intervenido no se puede afirmar que las sustancias ocupadas fuesen las que se relacionan en el informe genérico de los Peritos, y por ende no se ha podido concretar cantidad y si estaban o no caducadas.

En definitiva, no se puede considerar como probado ,con la exigencia de certeza exigible en un Proceso Penal , que concurra el mencionado elemento de la tipicidad del delito contra la salud pública ,

Finalmente, la Audiencia Provincial de Huelva en sentencia de 30 de diciembre de 2013⁸, condenó a los acusados, quienes venían dedicándose a suministrar sustancias dopantes, anabolizantes y otros medicamentos prohibidos o no recetados por facultativo, a personas dedicadas al deporte, culturismo o preparación de pruebas físicas de oposiciones a Policía Local, todo ello a cambio de dinero que los compradores les ofrecían, realizando el suministro fundamentalmente en Huelva y Sevilla. Castiga por la posesión para el suministro a deportistas de sustancias prohibidas, condenando a las penas de dos años y seis meses y un año y diez meses de prisión, con inhabilitación especial por cuatro años y seis meses para el ejercicio de profesión u oficio de comerciante, dependiente, encargado, gestor o monitor en negocios de venta de productos dietéticos, farmacéuticos o deportivos, gimnasios y preparación física o deportiva y multas de catorce mil euros y dieciséis meses, con cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal caso de impago de 240 días, así como al pago de las costas causadas por terceras partes iguales.

VI. CONCLUSIONES

La introducción en la legislación penal española del delito de dopaje ha sido necesaria, pero no sanciona al deportista sino a aquellas personas que le facilitan el consumo de sustancias dopantes con las que se pretende obtener un mayor rendimiento deportivo o la alteración de los resultados de las competiciones. Por ello, en el caso de que un deportista diese positivo en un control anti-dopaje el mismo no será juzgado nunca penalmente, aunque sí sus asistentes médicos si se puede acreditar indiciariamente que son los responsables del suministro del doping. Al deportista, sí se le podrá sancionar administrativamente, aplicando la Ley 3/13 de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, referida.

Ya en las legislaciones europeas como en Bélgica y en Francia se venía luchando tanto penalmente como administrativamente contra este ilícito y se amplía la corrección penal a países como Alemania que no tenían legislación penal sobre esta materia.

que hacíamos mención al comienzo de este Fundamento, por el que se dicta el pronunciamiento condenatorio en la Sentencia de instancia .

⁸ Sentencia núm. 374/2013 de 30 diciembre. ARP 2014\303.

Derecho penal español sancionado el delito de dopaje se acerca al modelo francés e italiano, pero entiendo que la postura debería tender a parecerse al modelo alemán sancionando únicamente las conductas más graves con los delitos ya existentes y dejando lo demás para el Derecho administrativo, para que no sobrepasase, como sucede ahora, el carácter de *ultima ratio* del Derecho penal.

BIBLIOGRAFIA

CORTÉS BECHIARELLI, E, El delito de Dopaje, Barcelona, Tirant lo Blanch, 2007.

CARMONA SALGADO, C., en COBO DEL ROSAL, M., Derecho penal español. Parte Especial. Madrid: Dykinson, 2004.

MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte general. Barcelona, Reppertor, 2009, p.40.

MUÑOZ CONDE, Manual de Derecho Penal, Parte Especial. 17ª edición. Ed. Tirant Lo Blanch págs. 603 a 607.

C.M, ROMEO CASABONA, “*Los delitos contra la salud pública: ¿ofrecen una protección adecuada a los consumidores?*», en ARROYO ZAPATERO, L. A. y BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. , **Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: In memoriam**, Volumen 2. Cuenca, Universidad de Salamanca y Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 630.

J. VALLS PRIETO, La Intervención del Derecho Penal en la actividad deportiva, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 11-14 (2009), p 18.

<http://www.dw.de/ley-anti-dopaje-una-mejora-sustancial/a-2671148>.

<http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-novedades-tributarias/la-nueva-normativa-de-lucha-contra-el-dopaje-en-el-deporte-espanol>.

<http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/>

<https://investigacioncriminal.info/2016/06/16/investigacion-del-delito-de-dopaje-deportivo/>

<http://www.alhambranet.info/el-delito-de-corrupcion-en-el-deporte/>